

Sobre maldiciones y demonios: Hidrocarburos y soberanía en una Tarija autónoma

*John-Andrew McNeish**

Resumen

En el presente artículo sostengo que los bloqueos recientes de Tarija proporcionan importantes señales de los vínculos existentes entre las políticas autonómicas y las políticas de recursos naturales dentro y fuera de la región. El trabajo además, tiene el objetivo de demostrar que el estudio de las protestas recientes en Tarija puede ser utilizado como base para una reflexión más profunda sobre las políticas de recursos naturales en general, y en forma particular, sobre la maldición de los recursos.

Abstract

In this article I argue that recent blockades in Tarija give important indications of the linkages that exist between the politics of autonomy and the politics of resources in the region and beyond. The paper furthermore aims to demonstrate that study of the recent protests in Tarija can be used as the basis for a more profound reflection on resource politics in general, and the resource curse in particular.

* Antropólogo e Investigador del Chr. Michelsens Institute (CMI) de Noruega. Actualmente dirige el proyecto “Flammable Societies: The Role of the Oil and Gas Industry in the Promotion of Poverty Reduction and Social Volatility”, auspiciado por el Norwegian Research Council. Este artículo fue traducido por Juanita Roca.

Introducción

El 1 de junio de 2009, el pueblo de Tarija (capital del departamento sureño de Bolivia, rico en hidrocarburos), se despertó al caer en cuenta que todos los caminos tanto dentro y fuera de su ciudad, estaban completamente bloqueados. Este fue el comienzo de una protesta de nueve días, protagonizada por una organización sindical de la región, denominada Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija (FSUCCT), que demandaba el incremento de los pagos de regalías por parte del gobierno departamental, con sede en la ciudad, para el desarrollo agrícola y rural en las áreas circundantes. Tomando en cuenta este mismo tipo de movilizaciones llevadas a cabo en los años 2004 y 2005, cuando las instalaciones de petróleo de Ysayachi y San Alberto fueron tomadas, el gobierno departamental había acordado crear el Programa de Solidaridad Comunal (PROSOL), en el cual 2,000.000 Bs (dos millones de bolivianos) correspondientes al presupuesto regional se destinarían a la asistencia de iniciativas de familias campesinas para el desarrollo económico. Como parte de este nuevo esfuerzo de la organización, se destacó la lentitud de los desembolsos de estos fondos, y se propuso una nueva demanda en base a las regalías departamentales provenientes de gas y petróleo, con el fin de triplicar los fondos de PROSOL dentro del presupuesto departamental del 2009. Exacerbados por el centralismo y por el rechazo del gobierno departamental para apoyar a las provincias, los manifestantes también demandaron la revisión del presupuesto departamental para que se efectuaran los pagos directos para las comunidades campesinas. De acuerdo a la cobertura de la prensa y los canales de televisión tarijeños, estos eventos fueron demoníacos, y se echó la culpa a las intenciones crueles de quienes fueron descritos como brutales manifestantes campesinos. “*Los bloqueos amenazan el derecho de los ciudadanos a la libre circulación, siembran violencia y agrandan los riesgos*”, declaró la editorial de El Nacional. En los medios, no se mostró compasión hacia las demandas de aquellos que estaban detrás de las barricadas. De manera contraria, los bloqueos de caminos fueron considerados como un intento sínico de forzar al gobierno departamental para que hubiera más reparticiones. Siguiendo estas conclusiones, el prefecto Mario Cossío comentó que los “*campesinos*

*invierten su tiempo en dividir a Tarija, mientras que el gobierno departamental opta por trabajos públicos”.*¹

Mientras los sucesos de Tarija son en sí mismos dramáticos, estos podrían ser considerados moderados en comparación con el proceso de cambio que ha llevado Bolivia a una crisis tanto política como económica, así como la transformación radical del país en un estado plurinacional.² Dentro de este ciclo los bloqueos y confrontaciones como aquel presenciado en Tarija, han sido pan de cada día. Sin embargo, a pesar de no parecer tan alarmantes en un contexto de transformaciones más amplias, en el presente trabajo sugiero que estos sucesos ofrecen una apertura importante para una reflexión sobre las dinámicas de los recursos y las autonomías, en una región poco estudiada o cubierta por las noticias.³ Así como se hace fuerte referencia a las dinámicas de las luchas departamentales por el poder, se argumenta que los recientes bloqueos en Tarija proveen señales importantes sobre los vínculos existentes entre las políticas de autonomía y las políticas de recursos dentro de la región. En este sentido, se demuestra que los elementos en el ámbito de estos bloqueos no solamente revelan aspectos importantes y muy ignorados sobre las dinámicas en torno a los recursos en Tarija, sino también que pueden ser utilizados como base de una reflexión más amplia y profunda sobre las políticas de recursos en general.

A pesar de que los recientes bloqueos en Tarija tienen claramente una determinación económica, la historia de la relación entre los actores involucrados, y de las diferentes conceptualizaciones del significado y orígenes de los recursos en cuestión, revelan que la protesta no era solamente motivada por una racionalidad económica orientada a aumentar los ingresos y los estándares materiales. Al contrario, la protesta debe ser comprendida

1 El Nacional 04/06/09, pág. 11

2 Para más información ver McNeish, 2008.

3 Los enfoques sobre las expresiones separatistas y racistas del Comité Cívico de Santa Cruz, los ataques a los campesinos, y las marchas en contra del MAS de parte de la Unión Juvenil Cruceñista, han sido en gran parte elaborados tanto por trabajos académicos como por la cobertura de medios internacionales. Así mismo, la captura y muertes de mercenarios de derecha, así como los ataques instigados por las autoridades departamentales de Pando que dejaron a más de treinta muertos.

como un impulso de acuerdo a la combinación de varios factores: un deseo de adquirir más, pero también se refiere a fundamentos históricos de identidades regionales y sociales; así como por sentidos cambiantes y disputados de soberanía, como, por ejemplo la identificación, la territorialidad y la propiedad de los recursos que estos sectores tienen en relación a los recursos naturales de la región y de sus valores. La protesta entonces no es sólo una cuestión de acceso, uso y propiedad de recursos. Como crítica a las teorías dominantes en torno a la gestión de recursos, en este artículo se demuestra que las quejas o las demandas sociales responden a una lógica más amplia que la codicia. Al resaltar esto, el presente artículo pretende cuestionar las actuales recetas en torno a la maldición de los recursos que limitan a seguir los principios respaldados internacionalmente en lo que se refiere a diversificación económica y gobernabilidad transparente. El trabajo concluye que es necesario considerar las ideas contrastantes sobre soberanía que están asociadas a los recursos naturales para encontrar soluciones a largo plazo para los conflictos en torno a los recursos.

Riqueza de los recursos y regionalismo en Tarija

Ha sido asumido que Tarija se queda dentro del mismo posicionamiento autonómico de Santa Cruz y otros departamentos de las tierras bajas. Si bien es correcto que el gobierno departamental ha lanzado su propia campaña por la autonomía, y es miembro del CONALDE (*Consejo Nacional por la Democracia*),⁴ es necesario reconocer que las dinámicas sociales y económicas dentro del departamento son muy diferentes a aquellas provenientes de otras regiones.

Tarija es uno de los nueve departamentos de Bolivia, ubicado en el sur del país, en el límite con Argentina y Paraguay. Es el departamento más pequeño de Bolivia, con una extensión territorial de 37.623 kilómetros cuadrados. Está constituido por dos zonas topográficas: el Chaco (13.208

4 La institución recientemente creada tuvo como propósito unificar las campañas regionales en contra del gobierno.

Kms. 2) y la zona Andina (20.833 km²). El uso de la tierra en la zona Andina (incluyendo las áreas montañosas, las praderas y los valles inter y sub andinos) está distribuido entre pastoreo, ganado, bosques extendidos y agricultura intensiva. En el Chaco, que es una región de tierras bajas caliente y semi-árida, y con una población dispersa, la tierra productiva está en gran medida dedicada a la crianza de ganado extensivo y a las reservas naturales nacionales. En 1976, la población rural era de un 61.1%, y en el 2001, del 36.7%. En el Censo Nacional 2001, el 80% de la población en Tarija se auto identificó como no-indígena (INE, 2001). Esto implica que este departamento es uno de aquellos con menor población indígena, la cual se auto identifica como quechua, aymara, guaraní o como perteneciente a dos grupos indígenas más pequeños (*Weenayeks* y *Tapietes*). No obstante, la población campesina y urbana más extensa del departamento, también se identifica de acuerdo a sus propias raíces del valle central o el área del Chaco, utilizando los términos de *chapacos* y *chaqueños*. De acuerdo al mismo censo, 51% de la población del departamento vive en pobreza, con un 86.6% en áreas rurales y un 30.5% en áreas urbanas.

Mientras no queda duda que el tejido social y espacial de Tarija es un producto de estas divisiones naturales y étnicas, también se trata del resultado de la particular formación histórica y económica del departamento. Las categorías étnicas básicas fueron definidas tempranamente durante la historia colonial de la región, en la cual se impusieron y produjeron nuevos órdenes espaciales y raciales, a través de los procesos de expansión y de conquista. Fue durante este período, y no hoy, que las nociones en torno a las fronteras tarijeñas nacían, y junto a ellas se creó la autonomía. Acá está tanto el comienzo de negociaciones diferentes del poder regional, en relación al Estado colonial, y la formación de divisiones sociales más claras, basadas en combinaciones de tipologías raciales y realidades políticas. A través de las pugnas militares con la población indígena (ahora los pueblos desaparecidos como los *Churumata* y los *Tomatas* del valle central, y los *Guaraní* de los valles sub-andinos y del chaco), los colonizadores españoles no solamente encontraron una frontera natural, sino también construyeron una “frontera” social para ser conquistada y sometida (Lizárraga Aranibar & Vacaflores Rivero, 2007). Con la conquista, el posicionamiento de la

población indígena estuvo entre ceja y ceja de la élite española gobernante. Eran vasallos, trabajadores y “otros”. El sistema colonial construyó un sistema de control político y producción económica basado en fortalezas y propiedades de la *encomienda*, donde se establecían contratos privados entre el Estado e individuos, con el fin de gobernar estos espacios para la Corona. A Luis Fuentes y Vargas, el fundador de Tarija en 1574 (posteriormente *San Bernardo de la Frontera de Tarija*) se le otorgaron los derechos de “justicia mayor”, por parte del Virrey Don Francisco de Toledo. Este era en esencia un contrato de control político, incluyendo la propiedad de tierras, derechos sobre la población indígena, y derechos de usufructo para todo el territorio. Los *criollos*, descendientes de los españoles, también se convirtieron en herederos de esta noción de propiedad del espacio, y de las divisiones sociales engendradas de ésta. Definitivamente estas ideas se arrastran hasta el presente, a pesar de los procesos de mestizaje y a los cambios legales con referencia a la ciudadanía que produjeron momentos claves en la historia moderna del país (la Guerra de la Independencia, la formación de la República de Bolivia, la Revolución Nacional de 1952, la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1992, etc.). Las divisiones entre el campo y la ciudad, entre el valle central y el Chaco, capital y provincia, y entre el *chaqueño* y el *chapaco*, aún reflejan el imaginario espacial y racial de la colonia (PNUD, 2003:19).

De alguna manera, la permanencia de estas categorías en el presente, se relaciona a la continuidad de la agricultura como una parte fundamental de la economía del departamento, y donde las categorías de terrateniente y campesino siguen en uso. En contraste con Santa Cruz, no existe una clase empresarial urbana y dominante en Tarija. Las élites permanecen en gran medida aferradas a la tierra, y se han enriquecido a través de la producción de vino y de fruta en el valle central. Estos productos que son consumidos en parte domésticamente, son vendidos en su mayoría en Argentina. También vale la pena tomar en cuenta que el desarrollo de la industria agrícola en Tarija, otra vez en contraste con Santa Cruz, se ha llevado a cabo en gran parte sin la asistencia del gobierno central. Hasta la década de los '90s, Tarija era una “isla rodeada de montañas” (10/2.09). Hasta hace poco, la economía del departamento permaneció encerrada en gran parte, lo cual

creó condiciones de bajos salarios y de pocos incentivos de cambio. El primer camino asfaltado entre Tarija y la frontera con Argentina recién fue construida en 1997. En cuanto a los caminos hacia La Paz y el Chaco, que aún están en proceso de construcción, estos continúan siendo peligrosos y en la mayoría sin asfalto. Como resultado, las élites dentro del departamento han formado relaciones más cercanas con Buenos Aires que con la capital boliviana. La división entre el valle central y el Chaco, también ha persistido bajo estas condiciones. Las élites poseedoras de tierras en el Chaco, lejos de controlar a las autoridades departamentales o a las instituciones de justicia, pudieron ignorar el desarrollo de los derechos humanos. Con la ausencia de autoridades estatales, las élites chaqueñas tuvieron la capacidad de explotar los recursos y la mano de obra sin limitaciones, dando como resultado que la población indígena se sometiera a trabajos forzados.

Mientras que las categorías espaciales y étnicas pueden de esta manera ser vistas como una permanencia sobre el tiempo, esto sin embargo no significa que la sociedad tarijeña ha permanecido estática y cerrada. Ubicada en la confluencia entre alta montañas, valles y un ecosistema de tierras bajas sub-tropical, Tarija ha sido siempre un enclave para los trashumantes (Preston, Macklin & Warburton, 1997). Para los propósitos del presente trabajo, es fundamental tomar en cuenta que dos grandes sucesos regionales han conmocionado el orden casi “feudal” descrito líneas arriba. Como resultado de las políticas de ajuste estructural introducidas para reinar en la hiperinflación boliviana y reestructurar la economía dentro de los lineamientos de gestión pública neoliberal, las minas en las tierras altas del país se cerraron o fueron privatizadas. Se estima que como resultado de estos cambios, 60.000 mineros fueron despedidos, y entre 20 a 30 mil familias llegaron a Tarija durante aquellos años, en busca de trabajo y nuevas oportunidades. Tal como Miguel Castro Arce⁵ lo describe en una entrevista:

“Esta gente llegó cargada de otro imaginario social, sindicalizada y organizada ideológicamente. Toda esta formación que habían utilizado previamente para enfrentar al estado, ahora la utilizaron para organizarse y mejorar sus condiciones de vida.

5 Fundación Avina, Tarija.

Comenzaron a hacer peticiones y presionar a los gobiernos municipales y departamentales. Como consecuencia, fueron en gran medida rechazados en los pueblos, donde las personas los veían como collas (de tierras altas) y morenos, por lo cual se vieron forzados a fundar nuevos barrios en la periferia de la ciudad. Fue ahí que entraron en contacto con la comunidad campesina de la zona. Hubo una conexión de “piel” entre estos grupos. Ahora los campesinos tarijeños se sienten más identificados con los collas pobres, que con la élite tarijeña. De esta manera, se formó una nueva base política y social en Tarija”. (13/02/09)

Es más que simbólico el hecho de que ahora existan dos carnavales en Tarija: uno en el centro de la ciudad, y otro en el mercado campesino, en la periferia de la ciudad. De manera interesante, esto también refleja la existencia de dos federaciones sindicales que reclaman representar los intereses de la población campesina. Una está ubicada en la oficina central de la COD (*Central Obrera Departamental*), la cual está aliada a la prefectura, conocida como la FSUTCT (*Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Tarija*), y la otra es la FSUCCT, mencionada líneas arriba, la cual encabezó los bloqueos recientes. Esta última está ubicada en las oficinas al lado del mercado campesino⁶.

La otra fuerza principal de cambio dentro del departamento ha sido la importancia creciente de la industria de hidrocarburos en la región. Tarija ha tenido una larga relación con la industria del petróleo. El primer pozo en Bolivia fue excavado en Bermejo en 1928, y la producción sería comenzó en el mismo departamento, como paso siguiente a la toma de la Standard Oil después de la Guerra del Chaco (1932-1935).⁷ Con la fundación de

6 La FSUCCT se separó de la FSUTCT en el 2003, como un esfuerzo de liberar a los movimientos campesinos de las relaciones clientelares previas con las élites de la ciudad.

7 También es importante tomar en cuenta que la guerra del Chaco (llamada por algunos historiadores como una guerra mundial, debido a que estuvieron involucradas las potencias de Estados Unidos y Europa, como apoyo tanto a las fuerzas bolivianas como paraguayas), también estuvo en gran parte enfocada en el control de la naciente economía del petróleo y sus reservas futuras. Esta guerra también tiene gran reputación en Bolivia, por ser responsable de impulsar las identidades indio-mestizas que serían el instrumento de la Revolución Nacional, como consecuencia de las grotescas condiciones de lucha en el semi-desierto chaqueño. También es necesario que ésta sea reconocida por haber jugado un rol importante en incentivar sentimientos regionales de autonomía. Al menos los tarijeños urbanos recuerdan la guerra en la cual se sacrificaron por sus formas de vida y sus recursos.

la empresa nacional de petróleo *Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos* (YPFB), Bolivia entró a una posición en la cual estaba habilitada para encarar las demandas domésticas por combustibles, y Tarija como departamento, comenzó a beneficiarse de las rentas y regalías de la industria. Mientras que en aquel entonces apenas comenzaba el vínculo con la industria petrolera, solo fue a partir del gobierno de Sánchez de Lozada que llegó realmente a ser muy importante en el departamento. Este flujo de inversión privada fue paralelo al descubrimiento de los mega-campos de gas de San Alberto, Sabalo, Margarita e Itau, los cuales crearon una oleada de actividad económica en las provincias de O'Connor y Gran Chaco. Más importante, la llegada de las empresas transnacionales y proyectos de exploración en estos distritos, revitalizaron el moribundo sector de los hidrocarburos (Perrault, 2008). Esta presencia fue acompañada de largas inyecciones de capital y tecnología y generó entusiasmo con respecto a la posibilidad de implementar proyectos de infraestructura masiva, relacionados al transporte y la distribución de estas reservas de gas, poniendo paralelamente un ojo a los mercados internacionales (Hindery, 2004). La expansión física del sector –a través de testeos sísmicos, la perforación de pozos exploratorios, y de la construcción de cientos de miles de oleoductos y gasoductos– fue en gran parte destinada a la región del Chaco. La bonanza del gas también significó que el gas natural se insertó firmemente y capturó la vida política y económica más amplia de Tarija, la cual ya se había convertido (de acuerdo a lo que un informante lo denominó) en “una adicta a los hidrocarburos”.⁸

La partida abrupta del Presidente Sánchez de Lozada el 2003, seguida por la presencia continua de los movimientos sociales, con el tiempo impulsó una nueva Ley de Hidrocarburos (N° 3058) en Bolivia, en el 2005. La nueva ley pretendía garantizar una porción más amplia de los beneficios de la extracción de hidrocarburos para la sociedad boliviana. La ley condujo a que se estableciera un mecanismo para reasignar más recursos financieros hacia los gobiernos regionales –tanto los productores como los no-productores– a través de un impuesto directo a los hidrocarburos, conocido como el IDH (*Impuesto Directo a los Hidrocarburos*). La implementación del IDH en el

8 Gabriel Gieta 20/05/09.

2005, significó que los departamentos que no habían recibido previamente recursos de los sectores de gas y petróleo, comenzaron a recibir grandes infusiones de fondos, y aquellos que ya los habían recibido a través de las regalías, vieron considerables incrementos.⁹ Los departamentos, como un todo, vieron que sus presupuestos se triplicaron en el lapso de tres años y que las rentas por petróleo y gas canalizados por el IDH conformaron una parte muy grande de los presupuestos departamentales (78%).

Estos cambios han transformado radicalmente el financiamiento público disponible en el nivel departamental de Tarija. Desde el 2005, las rentas de este departamento han subido desde \$US 66 millones en el 2004, hasta \$US 237 millones en el 2007¹⁰, con los ingresos por los hidrocarburos, contabilizando 80% de los ingresos del departamento (CEDLA, 2009). Esta bonanza de las rentas, la cual en parte solamente se atribuye a precios más altos en combustibles fósil (fossil fuels) en el mercado mundial¹¹, ha provocado una ola de trabajos de infraestructura, con la mirada hacia lo que el gobierno departamental esperó que fuera un futuro brillante para el desarrollo regional. El trabajo comenzó con una serie de proyectos prodigiosos, incluyendo una serie de represas, una red de carreteras pavimentadas para promover la integración de Tarija con mercados nacionales e internacionales, y una piscina olímpica.

Para los líderes políticos en Tarija, así como para otros sectores de la población (incluyendo simpatizantes del MAS y de la FSUCCT), la lucha por las regalías del IDH ahora se veía fundamental para las ambiciones del

9 La ley posteriormente estipuló que se formara un nuevo sistema de redistribución de los recursos producida por el IDH; 4% de los departamentos productores, y 2% para todos los departamentos en el país. A la vez, al Poder Ejecutivo se le otorgó el poder de utilizar los ingresos del IDH a favor del Tesoro Nacional, pueblos indígenas, municipios, universidades, las Fuerzas Armadas y la policía.

10 Incluye regalías e IDH. Estas incluyen casi todo el ingreso, como US\$175.5 millones en el 2007. Las regalías se pagan directamente al gobierno de la prefectura. El IDH sin embargo se distribuye a la Prefectura: (US\$35.2) para los 11 gobiernos municipales de Tarija (US\$21.3 millones), y para la Universidad Juan Misael Saracho (US\$5.3 millones).

11 Esta bonanza ya concluyó. Para abril 1 de 2009, los precios del gas han sido renegociados con el Brasil y Argentina, y los precios han caído más o menos en un 33% de lo que estaban en el 2008.

desarrollo económico regional. Sin embargo, a pesar de la expansión de la economía de hidrocarburos en el departamento, el prefecto y las elites departamentales de Tarija sostienen que debería ser pagada al gobierno departamental una porción más amplia del IDH, como reconocimiento a sus orígenes y tomando en cuenta que el recurso extraído no es renovable. Una visión que fue en gran parte capturada en una entrevista, fue la de Maria Lourdes Vaca, la Delegada Departamental para la Autonomía:

“Tarija tiene una posición interesante. Un 95% de los recursos de hidrocarburos en el país, se los encuentra en el departamento. Es acá que existe la posibilidad de generar la economía necesaria para subir los niveles en el resto del país...Sin embargo, pensamos que en este momento de las autonomías (refiriéndose a la nueva Constitución), deberíamos tener el derecho a decidir qué hacer con nuestros recursos para invertirlos, y hacerlo de una manera transparente, y en relación a la realidad de este departamento. El desarrollo de esta región se ha pospuesto durante años debido al centralismo” (22/02/09)

Esta posición también llegó con fuerza como consecuencia de las propuestas del gobierno central para nacionalizar una serie de proveedores de servicios locales¹², y particularmente la Empresa Tarijeña de Gas (EMTAGAS).¹³ A pesar de que finalmente se estableció un acuerdo sobre la propiedad compartida, los miembros de la empresa del Comité Pro-intereses del Departamento de Tarija, interpretaron esta propuesta como una amenaza directa a lo que ellos ven como patrimonio tarijeño. Resaltando este posicionamiento del 21 de mayo de 2009, el Comité Cívico publicó un aviso en el periódico local *–El Nacional–* dejando en claro el “Manifiesto para la Nación y el Pueblo de Tarija”. Con esto, el comité declaró un “estado de emergencia y movilización permanente para proteger las instituciones tarijeñas”.¹⁴

Hubo más quejas por la manera en que otras reformas y la acción del gobierno central vaciaron los recursos departamentales y obstaculizaron la competitividad de la industria hidrocarburífera. En el informe “Tarija

12 COSETT, COSAALT y SETAR.

13 Esta empresa provee gas a 30,000 usuarios en el departamento de Tarija.

14 El Nacional, 21/05/09.

cambia, la gente vive mejor”, lanzado para destacar el tercer año de la administración departamental del prefecto Mario Cossío Cortez, la sección sobre el destino de los recursos del IDH enlista una serie de confiscaciones de los presupuestos departamentales (Prefectura de Tarija, 2009). Estas incluyen la redistribución de fondos departamentales para los gobiernos municipales, el pago de un fondo nuevo de pensiones proveniente del IDH departamental, la incapacidad de cobrar impuestos e IDH de las transferencias de gas para Brasil (105 millones de bolivianos) y los cambios a la ley que regula el tiempo de los pagos de las regalías. Se estima que todo esto suma a la pérdida total de 759 millones de bolivianos (Prefectura de Tarija, 2009). Más allá de los impactos directos de los presupuestos, los líderes departamentales y simpatizantes del prefecto también cuestionan la forma en que el actual gobierno maneja el tema de la industria como un todo, y la forma cómo esto tiene un impacto en el desarrollo de los planes.

A nivel nacional, las quejas de los departamentos y demandas en torno a la autonomía de los recursos se enfrentan con poca comprensión. En el caso del bloqueo que se describe al comienzo del presente trabajo, el ministro boliviano de finanzas Luis Arce, mencionó que las demandas de los manifestantes eran de hecho realistas, dado que hubo un 6% de incremento en el presupuesto departamental durante el 2008. Arce arguyó que como resultado de los altos precios del petróleo y del gas, Tarija estaba en la posición de recibir el nivel más alto de inversión pública de su historia. La provocación de los bloqueos según afirmó el ministro, se debió a una gestión financiera pobre, y a la corrupción abierta de las autoridades departamentales, por ejemplo en relación al mal uso de fondos para propaganda política, y el no haber pagado completamente las obras públicas. De acuerdo a estadísticas oficiales, Tarija es el departamento con mayores recursos extraídos por las rentas de petróleo, por \$US 234 millones (CEDLA, 2009). Los analistas a nivel nacional destacan que Tarija recibe una parte desproporcionada del IDH, dada su población relativamente pequeña. Este departamento produce más de un 70% del gas natural de Bolivia, pero sólo tiene un 5% de la población total del país.¹⁵ No obstante, recibe un 20% de todas las regalías

15 Referirse a : <http://www.YPFB.gov.bo/>

del IDH (CEDLA, 2009). Esta distribución desproporcionada de riqueza hidrocarburífera es criticada y se han planteado argumentos que sostienen que el actual sistema de distribución de lo que es constitucionalmente la riqueza de la nación, va a impedir que el gobierno central dirija estos recursos con el fin de reducir la pobreza en general y de crear una nueva economía más allá de los hidrocarburos. Sobre esta base, se argumenta que debería ser aplicada una fórmula *per cápita*, con el fin de contribuir hacia el desarrollo de una economía más extensiva (Wanderley, 2008).

Luchando por la autonomía en Tarija

Durante los últimos años, ha habido una serie de votas populares sobre el tema de las autonomías en Bolivia. Estas votaciones populares han sido tomadas tanto por los gobiernos nacionales como departamentales, con el esfuerzo de impulsar apoyo y legitimidad “democrática” para sus posicionamientos y planes. Bajo un intento temprano para responder a la oposición, durante este período el gobierno primero introdujo la idea de implementar un referéndum con el tema de las autonomías, paralelo al referéndum que determinó la formación de la Asamblea Constituyente. Este se dio paralelamente a las elecciones para la Asamblea, con el fin de pacificar las facciones conservadoras en los departamentos del oriente, solicitando a los ciudadanos que votaran SI o NO en relación a la “autonomía”, y la transferencia de poderes para el gobierno departamental en vez del central. Morales y el MAS hicieron campaña para el NO, argumentando que el esquema de autonomías departamentales beneficiaría a los departamentos más ricos en recursos sin favorecer a los pobres. El MAS ganó 135 asientos en la asamblea, mientras el partido de derecha PODEMOS ganó 60, y Unidad Nacional logró 11. No obstante, el MAS no logró lo que había esperado. Se necesitaban el 2/3 de los asientos (170 de 255) para controlar la asamblea. En el referéndum para las autonomías en las provincias, el NO por la autonomía ganó en un 56%, y el SI ganó en un 44% a nivel nacional. Cuatro de nueve departamentos (otra vez todos parte de la Media Luna), votaron en gran proporción a favor de los departamentos autónomos que se establecían. No

obstante, quedaba claro que había un poco más que una vaga noción en cuanto a lo que podría significar la autonomía en la práctica. Los resultados en Tarija revelaron un gran apoyo por la autonomía, con más de un 60% a favor. Esta carrera cercana, dejó a la población boliviana y a la *media luna* con la impresión de que había suficiente apoyo para ambas propuestas de autonomía. Sin embargo, mientras que los resultados de las votas les otorgaron más autoridad a los gobiernos departamentales a través de medidas descentralizadoras existentes, las palabras vagas del referéndum dejaron a la Asamblea Constituyente los posteriores ajustes en relación a los poderes regionales. Incluso con el paso del tiempo, los analistas tanto extranjeros como bolivianos concuerdan en que los votos para la autonomía ocultaron más de lo que revelaron. Los últimos deseos y expectativas encapsulados en los votos no podían ser entendidos con facilidad, y era predecible que el esquema de votación se interpretó en formas que no reflejaron la realidad de los deseos de los votantes (Bebbington & Bebbington, 2009).

Las tensiones entre el ejecutivo y las prefecturas aumentaron puesto que los líderes de oposición presionaron con una serie de votas departamentales para las ordenanzas de autonomías. No hubo interés en esperar los resultados de un referéndum nacional sobre la nueva Constitución. El primer referéndum para las autonomías regionales se llevó a cabo en Santa Cruz, a principios de mayo, a través del cual los votantes apoyaron la autonomía. Los resultados esperados de estas consultas continuaron en el Beni y Pando, finalizando con el referéndum llevado a cabo en Tarija el 2008. Estos últimos, aparentemente confirmaron que la población votante apoyó aplastantemente la iniciativa autonómica. De casi un 62% de tarijeños que votaron, un 78% votó a favor de la autonomía (Bebbington & Bebbington, 2009). Como respuesta, la prensa local reportó inmediatamente la resonada victoria de las fuerzas autonómicas (Correo del Sur, 2008) y en la ciudad de Tarija realmente parecía que había un asombroso apoyo por la *autonomía*. No obstante con una mirada más cercana, los resultados del referéndum revelaron mucho más a una Tarija dividida, basada en aspectos rurales-urbanos y étnicos. Mientras que en las elecciones recientes la abstención en dicho departamento fue típicamente entre 10 y 15% en las provincias, esta vez las tasas fueron mucho más altas, especialmente en las

provincias rurales más allá del área urbana. Los grupos pro Morales/MAS también estuvieron divididos con respecto a la participación o no en el referéndum, y claramente muchos votantes hábiles decidieron abstenerse de estas elecciones, lo cual produjo una tasa departamental alta de abstención, por un 38% (Bebbington & Bebbington, 2009). Mientras tanto por su parte, los Guaraní y Weenhayek de Tarija se opusieron abiertamente a la propuesta departamental por la autonomía, con el argumento de que las autonomías indígenas de ninguna manera deberían ser de “segunda clase”, o sea subordinadas a la autonomía departamental (AINI, 2008).

Como reacción a estos votos departamentales, el gobierno nacional respondió negando su legitimidad, y además proponiendo una nueva llamada al referéndum, o voto revocatorio en agosto de 2008. El gobierno propuso que se decidiera el destino de todos los prefectos departamentales, así como el del presidente y vicepresidente, además de la propuesta constitucional, a través de los resultados de la votación. Una vez contados los votos, ambos lados reclamaron la victoria. Morales y García Linera fueron ratificados en sus cargos por un 67%, con un margen mayor al que los había traído al poder el 2005. Los prefectos de la media luna también fueron ratificados. En Tarija, Cossío fue apoyado con un 58.6%, mientras que Morales recibió un 45.6%.¹⁶ No obstante, mientras que Cossío ganó en la ciudad de Tarija, no fue ratificado en tres de las provincias rurales del departamento. Incluso el voto dividido entre Cossío y Morales revela que no llegó un mandato claro a Tarija. De manera contraria, el voto reafirmó los sentimientos ambiguos y complejos que están profundamente arraigados en los debates departamentales sobre la autonomía. Repitiendo lo explicado arriba, esto revela una marcada diferencia entre Tarija y Santa Cruz, donde un claro mandato se ha generado como apoyo a la campaña autonómica. Miguel Castro explica este contraste con un comentario reflexivo:

“En Santa Cruz ha habido más una condición para absorber la disidencia. Los collas llegaron a trabajar en industrias nuevas y fueron aceptados como ciudadanos. La ciudad

16 http://www.boliviainfoforum.org.uk/documents/526423448_BIF%20Bulletin%20Special%20edition%20August%202008.pdf

los ha absorbido. Existe discriminación, pero esta gente también es necesitada. Esto acá más bien no ha sido el caso, por lo cual los choques tradicionales y las confrontaciones continúan. La élite acá es incapaz de comprender su rol histórico, o que su sobrevivencia depende de que el resto sea genuinamente tomado en cuenta". (13/02/09)

Sin duda, en sus esfuerzos para armar la campaña por la autonomía, el gobierno departamental y sus simpatizantes en el Comité Cívico urbano, han estado satisfechos con la idea de perfilar la unidad en el sentido de representar a toda Tarija, y negando cualquier reclamo que sostenga que existen divisiones sociales y étnicas. De hecho, se han realizado grandes esfuerzos de parte del gobierno departamental para financiar asambleas públicas donde se dice que todos los sectores de la población han sido invitados.

"Esta no es una campaña ni para la derecha ni para la izquierda. Dentro de este proceso no se excluye a nadie. Todos están involucrados: las clases medias y los pobres. Nuestro acuerdo sobre la autonomía ha sido acordada por el voto popular. Nos hemos reunido con las comunidades indígenas del Chaco, y ellos forman parte de este proceso de autonomía". (Oswaldo Flores, Presidente del Comité Cívico, 22/02/09)

A pesar de estos argumentos de unidad e inclusión a través de la campaña por la autonomía en Tarija, líderes políticos municipales del Chaco han marcado su disidencia con el prefecto periódicamente, en gran parte sobre la base de su marginalización histórica y actual de los fondos departamentales. A pesar de que es un área defendida debido a su importancia nacional por sus reservas de petróleo, antes del descubrimiento de los *megacampos* hubo pocos esfuerzos para apoyar procesos más amplios de desarrollo económico y social en la zona (Lizárraga, Aranibar & Vacaflor Rivero, 2007: 63). Con el descubrimiento del gas, se tuvieron que hacer promesas para incrementar los presupuestos de los gobiernos locales dentro del departamento, con el fin de controlar los recursos de los hidrocarburos. En este acuerdo, se prometió un 45% de las regalías de petróleo. La llegada fallida de estos recursos, marcó el comienzo de una campaña más enfocada por las autoridades provinciales (Yacuiba, Caraparí y Villamontes). En el presente, el prefecto está acusado por los líderes chaqueños, de no cumplir con el pago de las regalías

acordadas para la provincia de Gran Chaco.¹⁷ Ahora se ejerce poder a través de los líderes elegidos en el Chaco, para abogar por la autonomía regional, bajo las condiciones otorgadas por la nueva Constitución¹⁸. El gobierno central estaba asistiendo a la región para llevar a cabo un referéndum el 6 de diciembre de 2009, como parte de las elecciones nacionales, con el fin de determinar el resultado final de este proceso.

La división y la confrontación también se ven en otros lados del departamento y la ciudad. Mientras que se han promovido reuniones y asambleas por el gobierno departamental, para democratizar entendimientos sobre la autonomía, algunos sectores no han sido invitados. Esto se refleja en los comentarios de la Defensora de Derechos Humanos de Tarija, Mariel Paz:

“El problema principal es que no se trata de un producto del pacto...Existen grandes e importantes sectores que no han participado en esta elaboración: campesinos, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, migrantes, y organizaciones populares como las barriales. De hecho, estos han sido marginalizados. Van a encontrar nombres en los documentos que dicen que representan estos intereses, pero en la realidad, representan intereses personales y no los de las bases. Como resultado, han creado un discurso que es discriminatorio, frecuentemente racista y excluyente. Con frecuencia han dicho que la gente que no está de acuerdo, se puede ir a vivir al occidente. Esta es una discriminación hacia aquellos que piensan diferente, que no han nacido en Tarija, o que nacieron acá, pero no piensa como ellos. Aquellos que han sido excluidos, son los sectores aliados al MAS, de los cuales la mayoría la mayoría son pobres,”. (26/05/09)

La realidad de la exclusión también se reflejó en los comentarios realizados por Mariana Hoyos, al describir la creación del Comité Cívico Popular, de la cual ella es presidenta:

“El Comité Cívico Popular nació del proceso de la Asamblea Constituyente, y la propuesta de autonomía por dos tercios de la población. No llegamos a acuerdos. Ellos

17 Ellos también arguyen que las obras públicas prometidas, especialmente los proyectos de carreteras, no han sido completadas tal como se lo prometió. Es más, lamentan el fracaso de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) para coordinar con el gobierno, a su favor.

18 En este pacto se prometieron 45% de las rentas de hidrocarburos.

organizaron huelgas de hambre en defensa de los recursos naturales del departamento, mientras que a la vez ignoraban nuestra necesidad de empleos. También vimos que estas huelgas de hambre eran una broma de lujo, con colchones cómodos y almohadas. El Comité Cívico Popular también nació porque el Comité Cívico de Apoyo a la Autonomía se negó a coordinar con nosotros: juntas vecinales, el Movimiento sin Tierra, los sin techo, desempleados, las Bartolinas (una organización de mujeres indígenas y campesinas). Otras organizaciones cívicas fueron también excluidas del proceso. Queríamos defender nuestros intereses cívicos". (10/02/09)

Esta falla de incluir y dialogar forma parte de la explicación sobre las protestas y los bloqueos descritos más atrás. No obstante, la militancia de estos grupos marginales también tiene que ser explicada a la luz de confrontaciones anteriores, de donde han surgido resultados más graves y delicados. Uno de los enfrentamientos más serios entre los militantes de la campaña departamental por la autonomía y los sectores excluidos ocurrió en el 2008 y con conexión con la movilización por la defensa del gas en el Chaco, descrita líneas atrás. El 10 de septiembre, líderes cívicos en la ciudad de Tarija respondieron a las denuncias sobre las movilizaciones de los tarijeños en el Chaco, realizadas por radio-estaciones controladas por campesinos. También hubo rumores de que los miembros del sindicato de campesinos (FSUCCT) estaban intentando marchar hacia la plaza principal, como protesta de estas acciones, llamando a una vigilia permanente para defender a la ciudad. No obstante, cuando los simpatizantes del MAS no aparecieron, un grupo de militantes pro-autonomía decidieron buscar otra confrontación, marchando a la oficina del sindicato, ubicada en el mercado campesino.

"Vinieron con mucha dinamita, y muchos de ellos estaban borrachos. Destruyeron puertas, ventanas, e hicieron todo para ser amenazantes. Muchos de nosotros no estábamos ahí. Estábamos en nuestras actividades normales, cuando estos muchachos llegaron. Grupo tras grupo, llegaron tirando dinamitas en el edificio del sindicato. ¡Un asalto total! Ambos bandos pelearon todo el día. Nos han ayudado los compañeros campesinos y sus familias". (Amil Carpez, Secretario General FSUCCT, 27/05/09).

Las organizaciones de los movimientos sociales y vendedores locales se movilizaron después para defender sus negocios y su espacio físico. Una

confrontación enojada y violenta tomó a los estudiantes y a la juventud urbana, en contra de los vendedores del mercado y de los campesinos (Bebbington & Bebbinton, 2009). Más de 80 personas quedaron heridas, incluyendo a un joven obrero que perdió su mano, al no sostener correctamente un pedazo de dinamita (El Diario, 2008).

Aparte de esta violencia directa, la autonomía y sus conexiones con los recursos de hidrocarburos en el departamento también han generado formas de violencia más duraderas, frecuentemente de una manera cotidiana (brutalidad y terror),¹⁹ y en una forma estructural (humillaciones y legitimaciones de desigualdad y jerarquía).²⁰ Dentro de este contexto, las grandes diferencias de valores económicos y de cosmovisión, junto con las ideas adscritas a los recursos naturales, salen a relucir con frecuencia. Un buen ejemplo de esto, es la forma en que la maldición del fervor ha ignorado los derechos de las comunidades indígenas de Tarija para desarrollar su economía de hidrocarburos. Asimismo, las autoridades gubernamentales (tanto nacionales como departamentales), junto con las empresas de petróleo y gas, han causado daños ambientales dentro de las áreas en las que viven las comunidades indígenas mencionadas. Con el descubrimiento de los megacampos y la inversión que tuvo que provenir de la capitalización, se ubicaron nuevos pozos dentro de territorios indígenas en las provincias O'Connor y Chaco. Por ejemplo, en 1998 Repsol ubicó tres pozos en Puerto Margarita. Los pozos fueron calibrados dentro de la proximidad de 2 a 3 Kms. del asentamiento local, y en una ocasión a pocos metros de donde está ubicada una comunidad Guaraní. A pesar de que Bolivia firmó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1993, el cual plantea que los pueblos indígenas tienen el derecho previo a consulta, la empresa no hizo ningún esfuerzo ni tampoco el gobierno, para consultar o compartir los beneficios con la comunidad. De hecho, según el Centro de Estudios Regionales de Tarija (CER-DET), institución a la cual le invitaba representar a la comunidad el 2000, no existía ningún estudio de impacto ambiental realizado en la zona. Cuando el personal de CER-DET

19 Ver por ejemplo Scheper-Hughes & Bourgois. 2004.

20 Ver por ejemplo Bourdieu, 1997.

llegó, se les presentó un estudio realizado en Chuquisaca. Inicialmente, la empresa rechazó la responsabilidad por cualquier daño social o ambiental identificado por la comunidad y CER-DET, y pasó la responsabilidad a su filial nacional MAXUS. A través de una negociación entre CER-DET, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y Repsol, con el tiempo se realizaron algunos acuerdos fuera de los juzgados,²¹ pero las otras promesas sobre otro tipo de asistencia para el desarrollo de las comunidades nunca llegó. Durante los últimos años, la APG ha buscado captar el apoyo de Ecuador y España, con la necesidad de abrir un caso propiamente tal en los juzgados. Repsol tiene planes de excavar otros 23 pozos en la misma zona, pero las actividades están paralizadas debido a las tensiones con la APG. En noviembre de 2005, la APG lanzó una nueva conferencia de prensa para las organizaciones interesadas, argumentando:

“Deseamos hacer conocer que REPSOL YPF no muestra ningún respeto por la cultura Guaraní, que ha ingresado al territorio de Itika Guasu, ubicado en la Provincia O’Connor del Departamento de Tarija causando daños a nuestro medio ambiente, destruyendo nuestros bosques, ahuyentando a los animales salvajes que son la fuente de nuestra subsistencia, y violando nuestros modos de vida comunitaria. En otras palabras, REPSOL YPF está matando nuestra cultura”.²²

No hubo mejoras en relación al monitoreo sobre la extracción de los hidrocarburos en el departamento, hasta que el gobierno de Mesa y la introducción de la nueva Ley de Hidrocarburos forzó a ajustar las regulaciones y derechos en torno a la extracción de hidrocarburos. No obstante, a pesar de las mejoras en los sistemas formales de monitoreo y los mecanismos de derechos internacionales²³, el coordinador de recursos naturales del CER-DET Alipio Valdez, informó la repetición de errores que se hacen en Puerto

21 180,000 dólares (por 2 años de monitoreo), 300,000 (compensaciones por ganancias perdidas) y 80,000 (proyecto de desarrollo comunitario).

22 <http://www.wrm.org.uy/bulletin/100/Bolivia.html>.

23 En particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2008.

Margarita y que se continúan cometiendo en el resto del departamento. Los derechos de los pueblos indígenas a la consulta pública bajo nuevas leyes, incluyendo la presencia de oficiales de Estado y la documentación detallada sobre los impactos sociales y ambientales, continúan siendo ignorados. De hecho, de acuerdo a Velez y Benildo Vaca de la APG, las cosas no han mejorado mucho con la nacionalización. De acuerdo a ellos, el Ministerio y la Superintendencia de Hidrocarburos permanecen estructuralmente incapaces para responder rápidamente a casos individuales de daños, o de hacer seguimiento a los hallazgos de los monitoreos sociales y ambientales de la zona. Incluso se cortan esquinas, y se ignoran importantes medidas de seguridad, debido al ímpetu de incrementar la producción. En una entrevista reciente (01/06/09), Valdez citó una lista larga de ejemplos de lo que ocurre, incluyendo la ampliación del gasoducto entre Villamontes y Tarija. Volviendo a la explicación anterior, el ducto tuvo que pasar a través de una pequeña parte del territorio Guaraní del Río Grande de Itika Guasu. No obstante, en vez de consultar a la población, YPFB decidió poner presión con una solución técnica donde se pudieran acomodar unidades de compresión en cada lado de esta sección del ducto, para que el gas se pudiera posteriormente comprimir y pudiera pasar por la dimensión existente, sin cambios ni consulta. Según otro caso, en Sanandita (una comunidad cercana a Yacuiba), se había firmado contratos entre YPFB y la empresa china Eastern Oil, para la explotación de un bloque, sin informar previamente a los Guaraní, y sin promover una consulta pública sobre el tema. En Resistencia, una comunidad Weenayek, también se está perfilando una historia parecida. No obstante, debido al asesoramiento de consultores externos, pararon los planes para posteriores extracciones, hasta que las regulaciones de las consultas y la documentación estén satisfechas.

El gobierno central ha respondido a estos comentarios, argumentando que las comunidades indígenas se están interponiendo a las necesidades de desarrollo nacional.²⁴ Mientras que están claramente demostrados los problemas de la empresa de petróleo, estos casos también revelan las fallas del

24 Ver “YPFB dice que indígenas traban las inversiones” La Razón. La Paz, Bolivia, 21/09/2009

gobierno departamental. Sin duda, las respuestas generales a estos reclamos por los daños por parte del gobierno departamental, han sido tratados, o con indiferencia o culpando a las mismas comunidades indígenas. En el caso del gasoducto, el gobierno departamental amenazó comenzar un juicio en contra de la APG por la pérdida de ganancias. Al conversar sobre derechos indígenas y demandas por los daños, Gabriel Geita, el secretario departamental de hidrocarburos durante la ejecución del proyecto del ducto comentó:

“Por qué tienen que hablar cuando el ducto está enterrado en el suelo? Ellos sostienen que hay sonidos (testeo sísmico) que molesta a los animales de donde viven. El gas cambia nuestras costumbres, y existen impactos ambientales. Yo veo esto como motivos para negociar y extorsionar. Si das una compensación de un millón de dólares a una comunidad de mil personas, nadie sabe lo que pasa con este dinero. ¡Nadie sabe! El Capitán Grande toma el dinero, y nadie se entera más. Las cosas son así en todo el país. Los campos de petróleo desafortunadamente están en el área sub-andina en territorios indígenas. Este es otro factor que hace que la inversión en Bolivia sea insegura”. (20/05/09)

Quizás no es sorprendente que enfrentada con semejantes opiniones, la APG apunta a utilizar la nueva Constitución en el caso de que se de un reclamo en relación a la autonomía indígena de Itika Guasu.²⁵

Recursos, Estado y Soberanía

Sería poco riguroso afirmar que lo explicado líneas arriba, es recuento comprehensivo de las políticas de recursos en Tarija. No obstante, capta una descripción general de las dinámicas de los recursos en la región. Al describir los antecedentes, la historia y las identidades de los diferentes sectores involucrados en el acceso, los beneficios y la gestión de los hidrocarburos en el departamento, el recuento también revela la naturaleza social de los

25 Entrevista con Benildo Vaca 16/02/09.

recursos naturales, y además proporciona la base para criticar la existencia de remedios rápidos para la maldición de los recursos.

Durante los últimos diez años, los enfrentamientos a los contextos de pobreza, violencia y guerra alrededor del mundo, han provocado un gran interés académico en relación a las dinámicas de los recursos naturales en general, y específicamente a la “maldición de los recursos”. Esta tesis intentó captar la paradoja de por qué a pesar de estar dotados por riquezas naturales, la mayoría de los países con dichos recursos, fallan en utilizar las ganancias procedentes de sus ventas, para beneficiar a la economía nacional y a los ciudadanos (Lynn Karl, 2004; 1997). Al reconocer la variedad de dificultades relacionadas a la extracción de recursos a escala global, se han realizado una serie de teorías y propuestas por investigadores y organizaciones internacionales, con el objetivo de aplacar la maldición de los recursos. A nivel local, las empresas de petróleo y minería, han comenzado a perfilar su responsabilidad social corporativa (RSC), respaldando proyectos locales para el desarrollo de infraestructuras, de educación, salud y desarrollo de servicios. A nivel macro, las propuestas ahora incluyen la estabilización de fondos de “commodities” que pueden suavizar la volatilidad de los precios, además de incentivar más apertura económica, y políticas externas sofisticadas de cambio, con el fin de mitigar los efectos de la “Enfermedad Holandesa”.²⁶ Asimismo, fomentar inversiones efectivas en recursos humanos, especialmente en lo que se refiere a educación y desarrollo de habilidades, así como mayor transparencia en las políticas tributarias (Glyfason, 2002). También ha sido ampliamente aceptado el hecho de que los resultados exitosos de estas políticas son altamente dependientes de la capacidad de las instituciones estatales y de los niveles altos de gobernabilidad y transparencia (Mehlum, Moene & Torvik, 2006; Robinson, Torvik & Verdier, 2006; Hodler 2006). En cuanto a las teorías disponibles enfocadas a la importancia de la formación de instituciones, el trabajo de Collier &

26 Basado en las experiencias de los Países Bajos sobre la tesis de la “dutch disease” (enfermedad holandesa), que sostiene que un incremento en los ingresos provenientes de los recursos naturales van a eliminar los incentivos para la industrialización y la consecuente diversificación de la economía nacional.

Hoeffler's (1998) "*greed vs grievance thesis*" (*la tesis de la avaricia vs. quejas*), ha tenido mayor impacto en el diseño de políticas internacionales. Según Collier & Hoeffler, los análisis estadísticos a gran escala de la ecología política de estos conflictos, revelan que no solamente son guiados por "fuertes discursos de quejas sino por una fuerza silenciosa de avaricia". Por ejemplo, los caudillos y las fuerzas rebeldes están impulsadas por las oportunidades de una renta de recursos provenientes de las rentas-botines, como medios de sobrevivencia y de perpetuación de la "economía de guerra" (1998: 101). En gran medida, con esta tesis como un respaldo "científico" se ha otorgado apoyo internacional a una serie de campañas respaldadas por ONGs y gobiernos, como la "Extractive Industries Transparency Initiative- ITIE" (Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas), el "Norwegian Oil for Development Programme" (Programa Noruego de Petróleo para el Desarrollo), y la campaña "Publish What You Pay" (Publique lo que paga), que tiene el objetivo de destacar el valor de los beneficios de las instituciones gubernamentales estables, junto con una transparencia de presupuestos y modos de rendición de cuentas (accountability).

Habiendo reconocido la importancia de las políticas gubernamentales, recientemente se ha conducido una serie de estudios que analizan empíricamente las fallas de los estados para tomar medidas que podrían cambiar la abundancia de recursos de una desventaja a una ventaja. Las observaciones de algunos de estos estudios establecen un vínculo directo entre la violencia del petróleo y la violencia política (Lynn Karl, 1997, 2004; Stern, 2005; Kleveman, 2004; Collier, 2003:60). No obstante, mientras cada una de estas teorías tiene sus propias fortalezas en poner atención a las diferentes dinámicas y problemas en relación a la gobernabilidad, algunos economistas y científicos políticos también reconocieron que tienen debilidades severas debido a sus limitaciones en cuanto a hallazgos cuantitativos, así como la falta de testeo y la escasez de estudios cualitativos. Según Ross (1999) "*La ausencia de pruebas cuidadosas ha tenido dos grandes consecuencias: los académicos no han podido producir un cuerpo acumulativo de conocimiento sobre políticas fallidas de los exportadores de recursos. Aparentemente sin la necesidad de ubicar sus teorías en alguna forma "testable" o verificable, sus argumentos frecuentemente se quedan sin elementos específicos, con variables nebulosas, dominios públicos ambiguos de*

casos relevantes, y mecanismos causales confusos". Incluso, una reseña reciente sobre la bibliografía del Instituto de Desarrollo Internacional (IDS) Inglaterra, plantea que hasta el presente los investigadores han sido demasiado reduccionistas porque se han intentado explicar el desempeño del desarrollo solamente en términos del tamaño y la naturaleza de los patrimonios de los recursos naturales de los países (Rosser, 2006). Como consecuencia de esto, están emergiendo consensos alternativos para que diversas variables políticas y sociales sean intermediarias en la relación entre la riqueza de los recursos naturales y los resultados del desarrollo (Rosser, 2006: 3). Omeje (2008) y Stevens & Dietche (2007) plantean con claridad que un elemento unificador clave es el proceso y el impacto contemporáneo de las historias políticas y de las historias sobrepuestas. El presente artículo busca contribuir a este consenso alternativo.

Algunos estudios cualitativos anteriores, realizados por antropólogos políticos y geógrafos sociales, han demostrado con solidez el valor de los enfoques de la economía política para comprender las historias y las dinámicas de los países ricos en recursos, como por ejemplo, la formación de identidades en torno a los recursos naturales y la operación de los sistemas de patronazgo (Coronil, 1997; Zalik & Watts, 2006; Watts, 2001). De hecho, más allá de las imágenes estáticas de violencia e inestabilidad reveladas por los estudios cuantitativos sobre la maldición de los recursos (Collier and Hoeffler, 1998; Ross, 2001, 1999), los estudios cualitativos han mostrado de manera sensitiva cómo los descubrimientos de petróleo y de riquezas han impactado en los procesos de transformación nacional política y legal en los estados post-coloniales. Además, demuestran cómo dichos impactos están estrechamente ligados a los cambios bruscos en los mercados y a políticas a nivel internacional (Sawyer, 2004; Apter, 2005).

Algunos de estos estudios coinciden con la crítica de Rosser (2006). No obstante, mientras que algunas investigaciones previas han puesto énfasis en las transformaciones de estados y más allá, sostengo que la historia caracterizada arriba nos revela más sobre los procesos relacionados al nivel del Estado y al interior de este. Estoy de acuerdo con los enfoques de economía política que dan luz a los cambios políticos en Bolivia, incluyendo un cuestionamiento de las reglas de la globalización junto con un rechazo

al neoliberalismo. Sin embargo, mi recuento revela una historia más larga y profunda sobre los posiciones y pensamientos dentro del departamento de Tarija. Sobre esta base, sostenemos que existe la necesidad de disgregar los entendimientos de economía política de las políticas de recursos, añadiendo una conciencia de las epistemologías sociales de los recursos, como un complemento a aquellas relacionadas a la soberanía.

Queda claro, de acuerdo a lo explicado en las páginas anteriores, que dentro del departamento de Tarija, las confrontaciones sobre el acceso y los beneficios del recursos de hidrocarburos, se relacionan fuertemente con procesos históricos y sociales. De la misma manera, los conflictos regionales por los recursos, no solamente se relacionan a intereses económicos y materiales, sino también a las ideas sobre la propiedad, etnicidad y clase, los cuales se pronunciaron antes y después del boom de los *megacampos*. Es posible destacar en la dinámica de los recursos en Tarija, la existencia de motivaciones contrastantes y a veces sobrepuestas en torno a la dependencia, los deseos y las cosmologías que empujan los debates y los conflictos. De esta manera, es posible hablar sobre la existencia y operación de diferentes epistemologías de los recursos, o sistemas de saberes. A pesar de que con frecuencia pensamos en los recursos como cosas naturales, el término captura una relación fundamentalmente *social*: la atribución de valores (económico y cultural) por un grupo a los atributos y capacidades que proveen una utilidad funcional a dicho grupo, así como el conflicto con aquellos que no comparten ese entendimiento. Es más, el término convencional “recursos naturales” es un significativo término erróneo tanto desde una perspectiva histórica como filosófica. Las prácticas de explotación, de encuestar, de medir y de experimentar por las cuales los recursos se hacen conocer (“se descubren”), resaltan sus orígenes profundamente sociales. Los recursos pueden ser considerados variadamente como una molestia costosa asociada a la producción de petróleo, contaminante ambiental, o también como un recurso natural valioso, dependiendo del saber, del precio, de las normas sociales y de las expectativas (en cuanto a polución), y la disponibilidad de combustibles alternativos. Al poner énfasis a la naturaleza social de los recursos, estoy sin embargo conciente junto con otros académicos, que es necesario considerar la interrelación entre las relaciones sociales y la

materialidad de los recursos en sí mismos (Bakker & Bridge, 2006). Un ejemplo de esto es el repaso de las ideas de Latour (1993) sobre la aclaración de ambigüedades para argumentar las formas en que la materialidad de los recursos es un producto de la aversión de las cualidades tanto físicas como sociales. Los autores argumentan que al destacar esta comprensión de la materialidad, la implicación de la acción social es acentuada, ya sea en el mundo de las cosas, cuerpos, redes o de las relaciones socio-ecológicas. Por lo tanto, para discutir sobre la materialidad, entonces hay que involucrarse con preguntas metafísicas de ontología, agencia e intencionalidad, además de reconocer que sus revelaciones otorgan evidencias que no son niveles (sustratos) que permiten variadamente o limitan la acción social, sino que son en sí mismos productos históricos materiales, así como prácticas representativas y simbólicas (ibid: 20). Aparentemente, repasando trabajos anteriores antropológicos sobre la “vida social de las cosas”²⁷, Sawyer (2009) de manera similar, arguye que la lucha por los recursos es simultáneamente material y simbólica, en cuanto a la interacción que rehace (y contiene) la naturaleza, la nación y la ciudadanía.

Volviendo a Tarija, estas ideas son importantes. Revelan que las confrontaciones locales en relación a la autonomía, son tanto una revelación de relaciones epistemológicas, como de intereses materiales. Así mismo, es posible afirmar que dichas ideas son una indicación sobre la posibilidad de diversificar y expandir los esfuerzos recientes de las ciencias sociales para repensar el significado de la soberanía en torno a los asuntos de los recursos (naturales). Durante los últimos años, el estudio de Agamben (1998) sobre la historia de la soberanía ha generado una serie de reflexiones interesantes que replantean la historicidad de los trabajos previos de Foucault sobre el poder y la mentalidad de gobernar (en inglés *governmentality*). La propuesta de Blom Hansen & Stepputat (2006) en relación al abandono de la soberanía como una fuente de poder y de orden de facto, solamente expresada en la ley o en términos de ideas fijas sobre una calidad de gobierno legítimo parece sobre todo relevante aquí. Alejándonos de la fuerza del control estatal, dichos autores ven a la soberanía como una forma siempre tentativa y

27 Ver Appadurai, 1986; Miller, 1987; 1998; Graves– Brown, 2000.

emergente de autoridad basada en la violencia, que actúa y es diseñada para generar lealtad, miedo y una legitimidad que opera en diferentes niveles: desde el barrio, hasta la cumbre del Estado y más allá (2006: 297). Más allá, Blom Hansen & Stepputat argumentan que la soberanía es siempre un ideal inalcanzable, y que ha sido particularmente tenue en muchas sociedades postcoloniales, donde el poder soberano ha sido distribuido históricamente entre varias formas de autoridad local. A través de esta posición, destacan que las configuraciones históricamente complejas y de soberanía que están frecuentemente irresueltas, han persistido en muchas sociedades postcoloniales, incluyendo América Latina, y han provocado el surgimiento de una serie de soberanías informales (2006: 305). De hecho, el mando y los despotismos locales de estas fuerzas, frecuentemente estructuran las vidas de gente común y corriente de manera más profunda y efectiva que la mirada lejana y de panóptico estatal. Esto parece particularmente relevante como una base teórica para las dinámicas en Tarija, donde la autonomía y la consiguiente lucha por los recursos puede ser interpretada como expresiones de una inconclusa soberanía, y el resurgimiento y la creación de contra-narrativas en torno a la soberanía que compiten en un período de cambio y de incertidumbre. En este caso, la soberanía también podría ser propuesta como una metáfora para el poder, racionalidad política y amenaza de violencia que sobrepone distintas epistemologías de recursos.

Conclusiones: Sobre maldiciones y demonios

El reconocimiento de la complejidad histórica y social en contextos como el de Tarija-Bolivia, requiere de interpretaciones que van más allá de las teorías actuales sobre la maldición de los recursos. Mientras que soluciones tecnócratas como la diversificación de la economía, respaldo a instituciones y gobernabilidad transparente pueden ser asuntos importantes a nivel del Estado-nación, el reconocimiento de la existencia de la profundidad y de la persistencia de las diferentes epistemologías de los recursos y de las soberanías informales, deja en claro la necesidad de recurrir a otras interpretaciones, antes de que se pueda consolidar el desarrollo y la paz. De

hecho, los acontecimientos surgidos a partir de distintas epistemologías y soberanías en diferentes contextos, revelan la necesidad de desarrollar soluciones particulares hechas a la medida, para cada medio relacionado a los recursos naturales, donde éste sea entendido como una construcción social y física. Acá hacemos alusión a trabajos antropológicos anteriores (Scott, 1999), que destacan la larga lista de proyectos de desarrollo a gran escala que han fallado, al ser utilizados por gobiernos centrales para imponer legibilidad en sus sujetos y en el ámbito local. Tal como ocurre con otros esquemas para mejorar la condición humana, la gestión de recursos tiene que tomar en cuenta las condiciones locales, con un fin de diseñar soluciones apropiadas. Tal como lo plantea Rosser, “solo al explorar más allá las dinámicas que revelan el desempeño de desarrollo de los países con abundantes recursos, seremos probablemente capaces de desentrañar niveles potenciales que podrían ser empleados para determinar las políticas requeridas, y provocar los cambios de conducta, institucionales o sociales” (Rosser, 2006: 26). Para encontrar soluciones de largo plazo a los conflictos relacionados a los recursos, es importante argumental sobre la necesidad de volver a unas preguntas básicas en relación al poder. Junto con ellas, a las ideas de participación donde se permita que las conclusiones sobre estos procesos se alimenten del estudio y del conflicto de epistemologías y nociones de soberanía, a través de conversaciones entre diferentes actores.

Bibliografía

- AGAMBEN, G.
1998 *Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- APTER, A.
2005 *The Pan African Nation: Oil and the Spectacle of Culture in Nigeria*. University of Chicago Press.
- BAKKER, K., y BRIDGE, G.
2006 “Material worlds? Resource geographies and the ‘matter of nature’ Progress”, in *Human Geography* 30: 5 pp5-27

- BEBBINGTON, D.; y BEBBINGTON, A.
 2009 "Anatomy of a regional conflict: Tarija and resource grievances in Morales' Bolivia". Forthcoming in *Latin American Perspectives*.
- BLOM HANSEN, T., y STEPPUTAT, F.
 2006 "Sovereignty Revisited". In *Annual Review of Anthropology* 35: 295-315.
- BOURDIEU, P.
 1997 *Pascalian meditations*. Stanford University Press.
- COLLIER, P. et al
 2003 *Breaking the Conflict Trap. Civil War and Development Policy*. Washington: World Bank/Oxford University Press.
- COLLIER, P., y HOEFFLER, A.
 1998 "On economic causes of civil war". In *Oxford Economic Papers* 50, 563-73 Available online at: <http://www.worldbank.org/research/conflict/papers/cw-cause.pdf>
- CORONIL, F.
 1997 *The Magical State: Nature, Money and Modernity in Venezuela*. University of Chicago Press.
- GLYFASON, T.
 2002 "Lessons from the Dutch Disease: Causes, Treatments and Cures", in *The Paradox of Plenty: The Management of Oil Wealth*. Report 12/02 Econ. Centre for Economic Policy.
- HARDT, M. y NEGRI, A.
 2000 *Empire*. Harvard University Press: Cambridge MA.
- HINDERY, D.
 2004 "Social and Environmental Impacts of World Bank/IMF-funded Economic Restructuring in Bolivia: An analysis of Enron and Shell's hydrocarbon projects". *Singapore Journal of Tropical Geography*, 281-303.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)
 2006 Características Sociodemográficas de la Población, La Paz-Bolivia.
 2001 Características Sociodemográficas de la Población, La Paz-Bolivia.

- KLEVEMAN, K.
 2003 *The New Great Game: Blood and Oil in Central Asia*. Atlantic Books: London.
- LATOUR, B.
 1993 *We have never been modern*. Harvard University Press.
- LIZÁRRAGA, A., Y VACAFLORES RIVERO, C.
 2007 *Cambio y Poder en Tarija: La emergencia de la lucha campesina*. PIEB, JAINA, Plural: La Paz
- LYNN KARL, T.
 2004 "Oil led Development: Social, Economic and Political Consequences". *Encyclopedia of Energy* vol. IV. New York: Elsevier.
 1997 *The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States*. Berkeley: University of California Press.
- MCNEISH, J.
 2006 "Stones on the Road: The Politics of Participation and the Generation of Crisis in Bolivia". *Bulletin of Latin American Research* 25:2. Pages 220-240.
- MINISTERIO DE GOBIERNO, Bolivia
 2007 *Constitución Política de Estado Boliviano*. Oruro: Bolivia.
- MEHLUM, H; MOENE, K. y TORVICK, R.
 2006 "Institutions and the Resource Curse". *The Economic Journal*. 116 January. Pgs 1-20.
- OMEJE
 2008 *Extractive Economies and Conflicts in the Global South: Multi-Regional Perspectives on Rentier Politics*. Ashgate Publishing.
- PERREAULT, T.
 2008 *Natural Gas, Indigenous Mobilization and the Bolivian State*. Geneva: UNRISD.
- PNUD
 2003 *Informe de Desarrollo Humano de Tarija*. Plural: La Paz
- PREFECTURA DE TARIJA
 2009 *Tarija Cambia, la gente vive mejor: Informe a 3 años de gestión*. Tarija.

- PRESTON, D., MACKLIN, M., y WARBURTON, J.
 1997 "Fewer People, Less Erosion: The 20th Century in Southern Bolivia". *The Geographical Journal* Vol 163. No2. Pp198-205.
- ROBINSON, J.A; TORVIK, R & VERDIER, T.
 2006 Political Foundations of the Resource Curse. *Journal of Development Economics*. 79 447– 468
- ROSS M. L.
 1999 "The Political Economy of the Resource Curse". *World Politics*. 51.2. Pgs 297-322
- ROSSER, A.
 2006 *The Political Economy of the Resource Curse: A Literature Survey*. IDS Working Paper No. 268
- SAWYER, S.
 2009 "Empire/Multitude-State/Civil Society: Rethinking Topographies of Power through Transnational Connectivity in Ecuador and Beyond". In Fischer, E (ed) *Indigenous Peoples, Civil Society and the Neoliberal State in Latin America*. Berghan Books: New York & Oxford.
- 2004 *Crude Chronicles: Indigenous Politics, Multinational Oil, and Neoliberalism in Ecuador*. Duke University Press.
- SCOTT, J.
 1999 *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press
- SCHEPER-HUGHES, N., y BOURGOIS, P.
 2004 *Violence in War and Peace: An Anthology*. Blackwell Publishing: Malden and Oxford.
- STERN, A.
Who Won the Oil Wars: Why governments wage war for oil rights. Conspiracy Books: London.
- STEVENS, P. & DIETSCHE, E.
 2007 Resource curse: An analysis of causes, experiences and possible ways forward. *Energy Policy* 36. pp56-65.
- WANDERLEY, F.
 2008 "Beyond Gas: Between the Narrow-Based and Broad-Based

Economy". In J. Crabtree, & L. Whitehead, *Unresolved Tensions: Bolivia Past and Present* (pp. 194-211). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

WATTS, M.

2001 "Petro-Violence: Community, Extraction, and Political Ecology of a Mythic Commodity. In *Violent Environments*, edited by N.L. Peluso and M. Watts. Ithaca: Cornell University Press. Pp. 189-212.

ZALIK & WATTS

2006 "Imperial Oil: Petroleum Politics in the Nigerian Delta and the New Scramble for Africa". *Socialist Review*. April